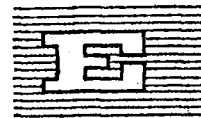


NACIONES UNIDAS

CONSEJO  
ECONOMICO  
Y SOCIAL



Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1155/Add.27  
15 de enero de 1975

ESPAÑOL  
Original: FRANCES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
31º período de sesiones

INFORMES PERIODICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Informes sobre los derechos económicos, sociales y culturales,  
correspondientes al período comprendido entre el 1º de julio  
de 1969 y el 30 de junio de 1973, recibidos de los  
gobiernos en virtud de la resolución 1074 C (XXXIX)  
del Consejo Económico y Social

FRANCIA

I. DESCRIPCION PRELIMINAR CONCISA DE LAS POLITICAS GENERALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL QUE HAN CONTRIBUIDO SIGNIFICATIVAMENTE A GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO, LA EFECTIVIDAD Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 1969 Y EL 30 DE JUNIO DE 1973

A. En el ámbito cultural

En Francia hace ya tiempo que existe una política cultural, puesto que el decreto por el que se crea un Ministerio especialmente encargado de los asuntos culturales se dictó el 24 de julio de 1959.

El hecho de apreciar al cabo de diez años los resultados de esa política es significativo de la evolución de los derechos culturales en nuestro país.

El nuevo Ministerio tenía por finalidad despertar en el público una mayor conciencia del derecho de toda persona a la cultura facilitando al mismo tiempo el ejercicio de ese derecho\*.

La política cultural que constituía una de las grandes opciones del VI Plan Quinquenal de desarrollo económico y social, (que empezó a aplicarse en 1971) se definía en dicho Plan como una acción global con miras "a ayudar a nuestros contemporáneos a percibir la cultura... no ya como un lujo, sino como la expresión de una necesidad esencial".

a) Concertación

La mayor parte de las administraciones francesas (en particular, las de Educación Nacional, Relaciones Exteriores, Juventud y Deportes) contribuyeron a esta labor, que no estaba por tanto exclusivamente a cargo del Ministerio de Asuntos Culturales, cuya función específica era de investigación, síntesis y divulgación.

El primer resultado comprobado por el Ministerio es una conciencia nueva del público en general frente a su acción, y sobre todo una conciencia nueva de las autoridades elegidas de las localidades, que hoy tienden a reservar a la cultura un lugar más equitativo en el desarrollo de un departamento o de una región.

El Ministerio trató pues de determinar los límites de esa creciente reivindicación cultural y de iniciar el diálogo, tanto con los demás responsables administrativos como con los beneficiarios de las acciones culturales.

---

\* La misión de ese Ministerio se definió en los siguientes términos:

"permitir al mayor número posible de franceses el acceso a las obras fundamentales de la humanidad, y en primer término de Francia, conquistar el interés del mayor público posible por el patrimonio cultural, y favorecer la creación de las obras del arte y del espíritu que lo enriquecen."

Habida cuenta de esta evolución, el departamento de cultura imprimió a sus intervenciones un nuevo estilo, asociando a sus actividades tradicionales, es decir a las acciones concertadas de divulgación y difusión (con mayor concertación, por ejemplo, con los profesionales y críticos integrantes de la comisión consultiva de asistencia a la primera exposición, creada en 1971, o la comisión de subvenciones a los teatros creada en 1972), el desarrollo de la colaboración a nivel ministerial (en 1971, por ejemplo, se elaboró una Carta de cooperación cultural con la Oficina de radiotelevisión francesa y se creó un Fondo de intervención cultural con cargo a los presupuestos de los diversos ministerios), y de la participación colectiva y privada, con miras a que los beneficiarios participen a la vez en la elaboración y la financiación de la actividad cultural que les interese.

De este modo, la posibilidad de lograr una cultura mejor tiende a no considerarse tanto como un beneficio unilateralmente concedido por la autoridad central cuanto como la reivindicación y el ejercicio de uno de los derechos humanos esenciales, ya sea del individuo o de la colectividad, con toda la adhesión voluntaria que entraña una conversión psicológica de esa índole.

b) Regionalización

Las principales actividades se dedicaron a los sectores de la población menos favorecidos hasta la fecha por su alejamiento del centro cultural que constituye tradicionalmente París.

El desarrollo de la radio y la televisión ya obraba en tal sentido, pero sin que ello implicase una participación creadora puesto que la capital tendía a conservar su carácter de centro privilegiado, si no de la recepción, por lo menos de la difusión cultural.

Se procedió a aplicar metódicamente una política de descentralización deliberada y a tal efecto se instituyó una administración regional adecuada, se crearon instituciones totalmente nuevas y se proporcionó un apoyo financiero a las iniciativas provinciales que habían demostrado su eficacia (en materia de música y de teatro, por ejemplo). Se multiplicaron los centros de difusión y creación artísticas, no sólo en las metrópolis regionales, sino en las ciudades de menor importancia.

c) Resultados

Desde 1971 se ha podido comprender mejor esta evolución merced a la creación de una célula de observación estadística en el Servicio de estudios e investigaciones del Ministerio de Asuntos Culturales.

Entre 1960 y 1973 se triplicaron (en francos constantes) los gastos en concepto de asuntos culturales y el consumo cultural de los franceses se duplicó con creces.

En efecto, los gastos culturales de la nación pueden estimarse en 1973 en cerca de 12.000 millones de francos. Desde 1960 el presupuesto cultural del Estado se ha multiplicado por seis (en francos corrientes) y el presupuesto del propio Ministerio de Asuntos Culturales pasó a ser de 223 millones de francos en 1968, a 1.075 millones en 1973.

Este esfuerzo financiero y la multiplicación de los medios de comunicación para las masas, han provocado una verdadera transformación: los gastos culturales de la familia ascendieron a 2,5% del presupuesto; la venta de libros en 1970 se duplicó, en relación con la de 1960; entre 1960 y 1973 se redujo en más de un tercio el número de franceses que no leían, y el de libros leídos por persona aumentó entre 1967 y 1973 en un 40%; las obras más populares eran las novelas de escritores contemporáneos. Un hecho aún más característico es el acercamiento del porcentaje de obreros que leían y poseían libros al porcentaje nacional (70%).

Entre 1960 y 1970 se triplicó el número de discos vendidos; el porcentaje de hogares en que había un tocadiscos pasó de 11% en 1960 a 57% en 1973 (51% en hogares obreros), y el índice medio de escucha de música registrada se ha duplicado desde 1967.

En cuanto a la televisión, en 1960 solamente el 13% de los hogares poseían un televisor; el porcentaje era de 86% en 1973.

Por otra parte, merced a la televisión se ha multiplicado el auditorio de todas las expresiones artísticas; así, el 76% de los franceses veían películas, mientras que el 60% veían obras de teatro, y entre 15 y 30% veían espectáculos líricos o de ballet (antes reservados a una elite social, sobre todo de la capital).

La televisión hizo disminuir la asistencia al cine entre 1957 y 1969, en un 56%, disminución por cierto mucho menor a la registrada en los países vecinos. Sin embargo, desde 1969 esa asistencia se ha estabilizado y cuenta con cerca de 180 millones de espectadores al año. En función de la concentración urbana, el número de salas ha disminuido en un 30% desde 1960, pero ese movimiento parece invertirse en la actualidad. En 1973, por primera vez el número de salas nuevas fue mayor que el de las que cerraron. En el período que se examina, ha mejorado la calidad de las salas y, entre 1969 y 1973 las salas especializadas en películas de arte y de ensayo pasó de 200 a 500, lo cual coloca a Francia, a este respecto, en el primer lugar en el mundo.

Desde 1969 a 1973 los créditos presupuestarios consagrados al cine aumentaron en 125%, y por tanto, la producción de películas francesas y de coproducciones de mayoría francesa (90 en 1962, 150 en 1973) pudo incrementarse.

También están en pleno desarrollo las demás actividades culturales, en las que influye menos el progreso técnico, pero en cuyo favor el Estado ha realizado un esfuerzo importante.

Tal es el caso de los museos, cuyos créditos se han quintuplicado desde 1960; mientras que el número de visitantes que pagan entrada en los museos nacionales pasó de 3 millones en 1958 a 5,5 millones en 1973, en los museos de provincias clasificados y controlados por el Estado, la asistencia se duplicó en los 5 últimos años y casi alcanzó a 5 millones de visitantes en 1973 (un francés de cada tres aproximadamente visita un museo durante el año). El índice de concurrencia a los monumentos históricos es análogo.

En las exposiciones temporales realizadas en París el número de visitantes se multiplicó por diez entre 1960 y 1970, y en 1973 hubo 450 exposiciones en museos de provincias.

En el Archivo nacional, el número de lectores se ha triplicado en diez años y en los Archivos departamentales, se ha cuadruplicado.

B. En el ámbito social

Para el período que se examina, las orientaciones a este respecto se encuentran en el V Plan (1966-1970) y en el VI Plan (1971-1975), en los que, entre otras cosas, se prevé por lo que respecta al empleo, la formación profesional y medidas especiales en favor de los impedidos, y se encuentran muchas indicaciones y programas precisos de acción.

II. INFLUENCIA QUE EJERCEN LOS INSTRUMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN QUE CONSTAN PRINCIPIOS Y NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, LA REALIZACION Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y, EN PARTICULAR, MEDIDAS ADOPTADAS PARA APLICAR TALES INSTRUMENTOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 1969 Y EL 30 DE JULIO DE 1973

A. En el ámbito cultural

a) En el período que se examina, se ha tomado nota de la entrada en vigor en nuestro país, el 15 de diciembre de 1972, de los artículos 22 a 38 del Acta de París (de 24 de julio de 1971) por la que se modifica el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (los artículos 1 a 21, así como el anexo no pudieron aprobarse hasta el 10 de julio de 1974 habida cuenta de las condiciones de reciprocidad previstas en el texto). Aunque convenía tomar nota de esta ratificación, ya que se ha producido en el período que se examina, no es posible dar cuenta de sus consecuencias eventuales puesto que la entrada en vigor de las modificaciones esenciales que entraña es posterior al mes de julio de 1974.

Además, y contrariamente a otras modificaciones anteriores del Convenio de Berna, las últimas modificaciones no tienden a mejorar la protección del derecho de los autores sino a facilitar el desarrollo de la cultura en los países en desarrollo.

b) En cambio, la ratificación por Francia, el 12 de septiembre de 1972 (que entró en vigor el 18 de abril de 1973), del Convenio firmado en Ginebra el 29 de octubre de 1971, por el que se prohíbe la reproducción no autorizada de los fonógramas (que protege también a los intérpretes y ejecutantes tratándose de obras y ejecuciones registradas), sí se sitúa en la perspectiva habitual de protección de los autores.

Este Convenio fue especialmente bien acogido por los círculos profesionales interesados.

c) Aunque las convenciones de la UNESCO de 1970 y 1972 no han podido tener consecuencia alguna en nuestra legislación, ya que el procedimiento de ratificación todavía no se ha terminado, conviene observar que esa legislación corresponde exactamente a las disposiciones de la Recomendación de la UNESCO aprobada en 1972, sobre la protección en el ámbito nacional, de los monumentos, los conjuntos arquitectónicos y los lugares, y los principios enunciados en esa Recomendación que tienen especialmente en cuenta el derecho a la protección del medio ambiente (a que se refiere, más adelante, el punto 5 de la sección C de la parte III) se aplican en la práctica en todo el

territorio francés, especialmente merced a las actividades de la Dirección de Arquitectura y de la Caisse Nationale des Monuments et des Sites.

d) Francia ratificó el 3 de julio de 1972 la Convención europea para la protección del patrimonio arqueológico firmada en Londres el 6 de mayo de 1969 y que entró en vigor en nuestro territorio el 5 de noviembre de 1972. En su mayoría, las disposiciones aplicables en territorio nacional eran ya observadas por los museos o el Servicio de excavaciones arqueológicas, pero merced al carácter de reciprocidad internacional que caracteriza a esta convención, se ha tratado de introducir una mayor moralidad en el comercio y normalizar la circulación de los objetos procedentes de excavaciones. En ese aspecto, la legislación francesa, aunque liberal, parece eficaz (por ejemplo, la propiedad lícita de ánforas descubiertas en el mar puede, bajo ciertas condiciones que protegen el interés científico del descubrimiento, reconocerse al descubridor).

e) Por último, tal vez convenga relacionar con esta sección la creación en 1971 del Festival Internacional de películas sobre los derechos humanos, en Estrasburgo, por el Presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Sr. René CASSIN. Bajo el patrocinio y con el apoyo del Centro Nacional francés de cinematografía, el festival se celebró en 1971, 1972 y 1973.

#### B. En el ámbito social

Cabe mencionar la ratificación, por una ley de 28 de mayo de 1971, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, a raíz de la cual se promulgó la ley de 1º de julio de 1972 sobre la lucha contra el racismo.

### III. ACONTECIMIENTOS DE IMPORTANCIA EN RELACION CON EL RECONOCIMIENTO, LA REALIZACION Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 1969 Y EL 30 DE JUNIO DE 1973, CON REFERENCIA, EN SU CASO, A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS Y LOS REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROMULGADOS Y LOS FALLOS DICTADOS POR LOS TRIBUNALES

#### A. El derecho al trabajo

##### 1. Derecho a la libre elección del trabajo

La ampliación del Organismo nacional de empleo y de la formación profesional de los adultos y el incremento de las intervenciones del Fondo nacional del empleo, previstos en los planes y en las leyes anteriores al 1º de julio de 1969, han contribuido a facilitar a los trabajadores la elección del empleo.

Las nuevas leyes dictadas en esas esferas son las siguientes:

- Ley, de 26 de diciembre de 1969, sobre la colocación de artistas de espectáculo;
- Ley, de 16 de julio de 1971, sobre la formación profesional continua;
- Ley, de 1º de julio de 1972, sobre la lucha contra el racismo;
- Ley, de 23 de diciembre de 1972, por la que se instituye una prima de movilidad para los trabajadores jóvenes.

2. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

Se han dictado las leyes siguientes:

- Ley, de 13 de julio de 1971, sobre los convenios colectivos de trabajo;
- Ley, de 24 de diciembre de 1971, sobre la reducción de la duración máxima del trabajo;
- Ley, de 3 de enero de 1972, sobre el trabajo temporero;
- Ley, de 11 de julio de 1972, sobre el trabajo clandestino.

3. Derecho a la protección contra el desempleo y el empleo insuficiente

Se ha dado efectividad al acuerdo interprofesional, de 27 de marzo de 1972, y a la ley, de 5 de julio de 1972, por la que se instituye una garantía de recursos para los trabajadores sin empleo mayores de 60 años de edad.

B. El derecho a la seguridad social, incluso al seguro social en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad

I. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Desde el 1º de enero de 1947 la prevención de los riesgos profesionales y la reparación de las consecuencias de dichos riesgos, en lo que respecta a los trabajadores asalariados (y asimilados) de las profesiones no agrícolas, están integradas en la organización de la seguridad social.

Los trabajadores que no se benefician de ningún régimen legal de indemnización por los accidentes ocurridos en el ejercicio de su actividad pueden acogerse voluntariamente a esa ley. Los comerciantes, artesanos, miembros de profesiones liberales, incluso las mujeres no empleadas que se dedican a los quehaceres domésticos, pueden pedir la inscripción en ese seguro voluntario.

Los trabajadores asalariados de las profesiones agrícolas se beneficiaban hasta hace poco tiempo de un sistema de protección basado en el principio de la responsabilidad del empleador que podía asegurarse.

En la Ley Nº 72-965, de 25 de octubre de 1972, relativa al seguro de los trabajadores agrícolas contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales (Journal Officiel de 26 de octubre de 1972), que entraba en vigor el 1º de julio de 1973, se prevé un régimen obligatorio de seguro, por medio de la mutualidad social agrícola de los asalariados agrícolas, contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que concede a los interesados ventajas análogas a las de los trabajadores asalariados de otras profesiones.

El Gobierno ha proseguido su acción con miras a facilitar el acceso a la formación profesional de los adultos y de los jóvenes que ya han emprendido una vida activa o que van a emprenderla y que deben adquirir una formación inicial o bien adoptar o perfeccionar sus conocimientos habida cuenta de la evolución de las técnicas o del hecho de tener, por razones económicas o de salud, que abandonar el ejercicio de su profesión.

La Ley Nº 71-575, de 16 de julio de 1971, relativa a la organización de la formación profesional continua dentro del marco de la educación permanente (publicada en el Journal officiel de 11 de julio de 1971), fija el régimen de protección social de las personas que siguen ese tipo de formación.

En su artículo 37 dispone que, durante los períodos de formación, los interesados gozarán de una de las formas de ayuda financiera previstas por la ley y quedarán sujetos a la legislación sobre accidentes de trabajo en las mismas condiciones que los alumnos de la enseñanza técnica en virtud del artículo L 416-2º) del código de seguridad social.

Para aplicar la ley se están elaborando medidas encaminadas a hacer extensivas esas disposiciones a todas las personas que reciben ese tipo de formación, aún cuando no perciban remuneración en ninguna forma (con exclusión de los funcionarios titulares del Estado y de los funcionarios de plantilla de las comunidades locales, que siguen sujetos a las disposiciones que les corresponden).

En consecuencia, actualmente las únicas personas que no gozan en Francia de un régimen obligatorio de protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son las que no ejercen ninguna actividad profesional o no se encuentran en una de las situaciones previstas (formación profesional, reeducación...).

Los riesgos profesionales cubiertos por esas leyes engloban los accidentes de trabajo propiamente dichos, los accidentes "de trayecto" (el que se recorre para ir al lugar de trabajo y para volver del mismo) y las enfermedades profesionales incluidas en los cuadros que acompañan las disposiciones reglamentarias en forma de anexo.

En el período que se examina, se han extendido y modificado los cuadros de las enfermedades profesionales en virtud de los Decretos Nº 72-1010, de 2 de noviembre de 1972 (Journal officiel de 9 de noviembre de 1972), y 73-215, de 23 de febrero de 1973 (Journal officiel de 2 de marzo de 1973).

Con arreglo a esos textos el número de cuadros de enfermedades profesionales que se anexan al Decreto de 31 de diciembre de 1946 ha pasado de 48 a 63, y 11 de esos cuadros han sido revisados.

Se está preparando el 64º cuadro relativo al oxicarbonismo.

Con motivo de las instrucciones difundidas sobre la aplicación de los Decretos antes citados, se señaló nuevamente a la atención de los médicos la conveniencia de que observaran las disposiciones legales que les obligan a declarar a la Inspección del trabajo toda enfermedad de origen profesional de la que tengan conocimiento.



Esas declaraciones sirven de base para los estudios encaminados a lograr una mejor prevención de las enfermedades profesionales, y a extender los cuadros en virtud de los cuales se indemniza a las víctimas.

Se ha considerado que cabe mejorar la protección de la familia del trabajador en caso de que éste sea víctima de un accidente mortal.

Independientemente de las prestaciones estipuladas por la ley (subsidio por defunción, reembolso de gastos funerarios, rentas a los derechohabientes), en virtud de las Ordenes de 9 de julio de 1971, se ha autorizado a las Cajas a conceder a los derechohabientes de la víctima, con cargo a sus fondos para actividades sanitarias y sociales, una ayuda inmediata cuyo monto máximo sujeto a indización se elevaba, al final del período que se examina, a 1.224 francos.

En el período que se examina, las autoridades públicas han hecho hincapié en su acción encaminada a humanizar las relaciones entre las instituciones competentes y los contribuyentes y beneficiarios.

Se ha pedido a los administradores responsables de esas instituciones que sensibilicen más a sus colaboradores en este aspecto importante de sus funciones.

Se ha invitado a estos administradores, en particular en la compleja esfera de la aplicación de las leyes sobre la reparación de las consecuencias de los riesgos profesionales, a que velen por que a este respecto se informe claramente a empleadores y beneficiarios, y que se les brinde la posibilidad de ejercer sus derechos. En una instrucción (20 SS, de 9 de marzo de 1971) se insiste de nuevo en este punto.

Aun cuando hayan sido dictadas poco después de terminar el período que se examina, cabe mencionar dos decisiones del Tribunal de Casación, adoptadas a raíz de recursos presentados por iniciativa del Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social, con miras a permitir que se examine, a nivel de jurisdicción más elevado, un problema particularmente importante por sus repercusiones sociales, el de la protección de los trabajadores que sufren algún accidente a consecuencia de actos de salvamento.

El Tribunal de Casación, sala social (17.10.73) se pronunció sobre las condiciones de la responsabilidad, de conformidad con las leyes sobre accidentes de trabajo, de las consecuencias de los accidentes resultantes de tales actos cuando ha habido interrupción, por una parte del trabajo, y por otra del trayecto recorrido con miras a socorrer a una persona en peligro.

En los dos casos sometidos a su apreciación, el Tribunal Supremo estimó que el conjunto de factores que se habían tenido en cuenta demostraban un "imperioso deber de solidaridad" que prevalecía con respecto a cualquier otra consideración y que no podía entrañar la privación para los interesados del beneficio derivado de las leyes sobre accidentes de trabajo.

En consecuencia, la solución que dio el Tribunal de Casación garantiza una protección eficaz a los trabajadores víctimas de un acto de abnegación.

## REGIMEN GENERAL

Mejora de la protección en caso de vejez y de viudez para los asegurados por el régimen general.

A) En lo que se refiere a los derechos que rigen la percepción de una pensión de vejez, la Ley de 31 de diciembre de 1971 mejora esas pensiones al disponer que para calcularlas se tengan en cuenta los años de seguro acumulados después del trigésimo año, que se liberalicen las condiciones para acogerse al derecho de invalidez y que se otorgue a la mujer asegurada que haya criado dos o más niños durante nueve años al menos antes de que haya cumplido 16 años de edad, un aumento de la duración del seguro igual a un año suplementario por niño criado en esas condiciones (en cuanto respecta a las mujeres con hijos, la Ley de 3 de enero de 1972 dispone, además, la afiliación obligatoria al seguro de vejez de las que gozan del subsidio de salario único o del subsidio del ama de casa con hijo, y del aumento que se concede a esas beneficiarias, en función de los recursos, por el número o la edad de sus hijos).

Para la aplicación de la mencionada ley de 31 de diciembre de 1971 se han dictado los dos Decretos siguientes:

El Decreto Nº 72-78, de 28 de enero de 1972, relativo al nuevo modo de cálculo de las pensiones de vejez, que dispone que éstas se calcularán dentro del límite de los 37 años y medio de seguro; los asegurados que justifican esa duración del seguro obtienen una jubilación igual al 25% de su salario anual medio base si la jubilación se liquida después de los 60 años de edad; si el asegurado aplaza la liquidación de su pensión después de esa edad, su pensión aumenta en un 5% del salario base por año a partir de esa edad; por ejemplo, se aplica la tasa del 50% en caso de liquidación a los 65 años (o por invalidez para el trabajo, por dictamen facultativo, a partir de los 60 años).

Sin embargo, esas medidas no surtirán pleno efecto hasta 1975; en el período de transición, de 1972 a 1975, las tasas aplicables para el cálculo de las pensiones de vejez aumentarán en función del año en que el interesado haya empezado a disfrutar de ellas; en consecuencia, deben ser liquidadas teniendo en cuenta los periódicos de duración de seguro máximos siguientes: 32 años en 1972; 34 en 1973 y 36 en 1974 hasta llegar a 37 años y medio en 1975.

El Decreto Nº 72-423, de 17 de mayo de 1972, por el que se precisan las modalidades de aplicación de las nuevas normas relativas a la invalidez que, con miras a conceder a partir de los 60 años de edad la pensión de vejez con arreglo a la tasa normalmente aplicable a los 65 años, permite reconocer inválido para el trabajo al asegurado que no puede seguir desempeñando su empleo sin grave perjuicio para su salud y cuya capacidad de trabajo se encuentra reducida en un 50%, según dictamen facultativo. Sin embargo, si el beneficiario de una pensión de invalidez reanuda una actividad profesional cuya remuneración rebasa cierto nivel fijado por ese decreto, el goce de la pensión puede ser suspendido.

Además, de conformidad con el Decreto Nº 72-1229, de 29 de diciembre de 1972, el salario que sirve de base para calcular las pensiones de vejez es el salario anual medio correspondiente a los diez años civiles de seguro más favorables (acumulados con posterioridad al 31 de diciembre de 1974), mientras que antes del 1º de enero de 1972, el salario base se determinaba únicamente a partir de los diez últimos años de seguro.

La revalorización anual de las pensiones de vejez ha sido sustituida, en virtud del Decreto Nº 73-1212, de 29 de diciembre de 1973, por una doble revalorización, la primera con efectividad a partir del 1º de enero, y la segunda, a partir del 1º de julio.

Por último, la Ley de 21 de noviembre de 1973 -cuya forma de aplicación a los acogidos al régimen general ha sido fijada por el Decreto Nº 74-54, de 23 de enero de 1974- dispone, a favor de los excombatientes y prisioneros de guerra, la posibilidad de obtener su pensión con arreglo a la tasa normal entre los 60 y los 65 años, determinándose la edad exacta en función de la duración de su cautiverio o de los servicios militares que hayan prestado en tiempo de guerra.

B) En cuanto a la protección en caso de viudez, las condiciones para la concesión del derecho a percibir una pensión de reversión ha sido mejorada por los tres decretos siguientes:

- el Decreto Nº 71-123, de 11 de febrero de 1971, que fija el límite máximo de los ingresos personales del cónyuge supérstite del asegurado fallecido al nivel anual del salario mínimo interprofesional de crecimiento al 1º de enero del año de defunción (por ejemplo, 11.294 francos al 1º de enero de 1974);
- el Decreto Nº 71-280, de 7 de abril de 1971, que suprime el requisito de la celebración del matrimonio antes de que el asegurado haya cumplido los 60 años y que mantiene solamente un requisito con respecto a la duración del matrimonio (como mínimo, dos años antes de la fecha en que empieza a devengar la pensión de vejez o cuatro años antes del fallecimiento).
- el Decreto Nº 72-1098, de 11 de diciembre de 1972, que fija en 55 años (en lugar de 65) la edad para conceder la pensión de reversión.

#### Régimen de jubilación complementaria

Los regímenes de jubilaciones complementarias del régimen de seguros sociales se han hecho extensivos, desde 1969, a un número creciente de asalariados del sector privado en virtud de convenios colectivos o de acuerdos relativos a la jubilación.

Con el fin de generalizar totalmente las jubilaciones complementarias se ha dictado una disposición legislativa importante, la Ley Nº 72-1223, de 29 de diciembre de 1972, según la cual las categorías de asalariados cubiertos obligatoriamente por el seguro de vejez del régimen general de seguridad social y los antiguos asalariados de la misma categoría, que no estaban acogidos a un régimen de retiro complementario, quedarán obligatoriamente afiliados a tal régimen. Esta disposición, que empezó a surtir pleno efecto el 1º de julio de 1973, afecta a un millón de asalariados activos y entre 500.000 y 600.000 jubilados que hasta entonces estaban excluidos de las prestaciones de la jubilación complementaria. En adelante, todo jubilado del régimen general de seguridad social gozará de una o varias prestaciones complementarias por el conjunto de su actividad remunerada.

#### Trabajadores no asalariados

- Seguro de vejez: la Ley de 3 de julio de 1972 modifica el régimen del seguro de artesanos, industriales y comerciantes para adaptarlo al régimen de los trabajadores asalariados.
- Protección en caso de pérdida de los medios de subsistencia: la Ley de 13 de julio de 1972 crea un régimen de ayuda a los artesanos y comerciantes de más de 60 años de edad que disponen de escasos ingresos y cuya empresa no puede ser vendida a un precio normal.

## REGIMENES ESPECIALES

### II. Políticas generales que han contribuido a garantizar el reconocimiento, la efectividad y la protección de los derechos sociales en relación con los regímenes especiales de seguridad social durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

1) En términos generales, el principal motivo de preocupación de las autoridades, responsables de los regímenes especiales de seguridad social, es su desequilibrio financiero; el déficit obedece a la degradación cada día más acentuada de la estructura demográfica de esos regímenes en los que la proporción de jubilados es anormalmente elevada en relación con la población activa contribuyente. Las consecuencias son particularmente graves para los regímenes de pensiones, pero afectan también a los de seguro de enfermedad e incluso a las prestaciones por accidentes de trabajo. A esta estructura demográfica desfavorable se suma una contracción económica en los sectores de actividad interesados, que entraña una reducción del personal empleado.

Las actividades emprendidas recientemente que tienden a fomentar el establecimiento de nuevas estructuras para lograr un mejor equilibrio financiero, consisten en definir y aplicar en lo sucesivo el principio de solidaridad a nivel interprofesional o internacional.

Así, se admite no sólo la participación directa de fondos públicos en el pago de las prestaciones concretas previstas en los regímenes especiales, sino también la necesidad de establecer un medio para que otros regímenes de seguridad social (de hecho, con el régimen general) contribuyan a enjugar el déficit resultante de las peculiaridades de la estructura demográfica de los regímenes especiales.

El régimen minero ha sido el primer beneficiario de una compensación con el régimen general, compensación prevista en la ley de finanzas para 1964 sobre el seguro de vejez y las prestaciones por accidentes de trabajo. Más recientemente se ha instituido una compensación respecto de las prestaciones en especie de los seguros de enfermedad, de maternidad y de invalidez, primeramente por la ley de finanzas para 1971, en apoyo del régimen especial para los funcionarios de los ferrocarriles nacionales, y más tarde por la ley de finanzas para 1972, relativa a los regímenes especiales para los marinos, los mineros y los empleados de la empresa de transportes públicos en París.

- Se ha mantenido además la política de protección social que consiste, por una parte, en extender a nuevas categorías de beneficiarios el derecho a las prestaciones del seguro de enfermedad y del seguro de vejez y, por la otra, en aumentar la cuantía de las pensiones.

Por último, cabe señalar respecto de las prestaciones familiares, en principio idénticas a las previstas en el régimen general, que varios regímenes conceden prestaciones complementarias (funcionarios de los ferrocarriles nacionales, de la empresa de transportes públicos de París y de Electricidad de Francia).

2) Acontecimientos en relación con el reconocimiento, la realización y la protección de derechos sociales durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

a) Seguro de enfermedad

1) Régimen para los funcionarios públicos:

- En el Decreto Nº 70-1272, de 23 de diciembre de 1970, acerca del régimen de seguridad social aplicable a los funcionarios que trabajan a tiempo parcial, se prevé el mantenimiento de las prestaciones del régimen de seguridad social correspondiente.
- Por la Ley Nº 72-594, de 5 de julio de 1972, que modifica la ordenanza Nº 59-244, de 4 de febrero de 1959, relativa al estatuto general de los funcionarios, se mejoran los derechos en relación con los permisos de enfermedad, sobre todo en los casos de ausencia prolongada. En el Decreto Nº 73-204 de 28 de febrero de 1973 (Journal officiel de 1º de marzo) y en la Orden de 19 de julio de 1973 (Journal officiel de 26 de julio) se establecen las modalidades de aplicación de las nuevas disposiciones.

2) Régimen para los militares de carrera:

- En el artículo 2 del Decreto Nº 72-183, de 6 de marzo de 1972, se dispone la concesión de subsidios a los militares y a los familiares de éstos que no reciban ninguna protección social. Con este fin, se prevé la apertura en la Caja Militar Nacional de Seguridad Social de una cuenta especial en la que se ingresará un subsidio del Estado. La Caja pagará a título temporal y con cargo a esta cuenta prestaciones diarias en metálico en caso de incapacitación física, o prestaciones compensatorias en caso de invalidez o defunción.

3) Personal obrero de empresas del Estado y de establecimientos públicos industriales.

- El Decreto Nº 72-154, de 24 de febrero de 1972, mejora el régimen de permisos de enfermedad, de maternidad y de accidentes de trabajo a que pueden acogerse ciertas categorías de obreros de empresas estatales.

En dicho Decreto se prevé que en caso de enfermedad corriente podrá extenderse una autorización especial para que los interesados sigan percibiendo parte de su sueldo durante nueve meses.

En cuanto a las enfermedades prolongadas y a varias otras afecciones, se prevén largos permisos de enfermedad con cobro de sueldo durante un año, y del 50% del sueldo durante dos años.

4) Empresas de electricidad y gas

- Por el Decreto Nº 70-247, 20 de marzo de 1970, se extiende al personal de las empresas de electricidad de los departamentos de ultramar la aplicación de las disposiciones de seguridad social del estatuto nacional.

b) El seguro de vejez: Se han introducido varias mejoras en el sistema de pensiones de ciertos regímenes especiales de la seguridad social.

1) Régimen para los funcionarios de los ramales secundarios de ferrocarril y los tranvías

- El Decreto N° 70-126, de 6 de febrero de 1970, introduce sensibles mejoras en el sistema de jubilación. En este texto se prevé, en particular, la extensión del aumento de los subsidios por hijos a las pensiones de vejez, el establecimiento de una cuantía mínima para las pensiones de antigüedad, y el cómputo del año de formación en el servicio anterior a la afiliación a la seguridad social de los períodos de movilización y de servicio militar obligatorio.
- 2) Régimen de seguridad social para los mineros.

- En el artículo 24 de la Ley presupuestaria de 31 de diciembre de 1970, por la que se rectifica la Ley presupuestaria para 1970, se prevé el pago por el Estado de las prestaciones de calefacción y alojamiento percibidas por los pensionados de las explotaciones que hayan cesado toda actividad.

En la misma Ley (artículo 25) se dispone la afiliación, a partir del 1° de enero de 1971, al régimen especial de seguridad social para los mineros -seguros de vejez, invalidez y defunción (pensiones de superstites)- de los trabajadores cuya ocupación principal sea la extracción o la elaboración entre los yacimientos de arcillas refractarias de uso industrial explotadas en galerías subterráneas encofradas. En el Decreto N° 72-93 de 19 de enero de 1972 (Journal officiel de 19 de enero) y en la Orden del 1° de junio (Journal officiel de 16 de junio) se establecen las modalidades de aplicación de dicha Ley.

- El Decreto N° 71-456, de 8 de junio de 1971, da mayor flexibilidad a los requisitos de anterioridad del matrimonio fijados para la concesión del derecho a la viudedad.
- Desde la promulgación del Decreto N° 71-1069, de 24 de diciembre de 1971, se calculan las pensiones por prorrateo del número de trimestres (en vez de años).
- Por el Decreto N° 72-201, de 20 de abril de 1972 (modificado por el Decreto de 27 de octubre de 1972), se revalúan las prestaciones de vejez y de invalidez, y se autoriza el cómputo de los períodos de invalidez general para la adquisición y el cálculo de los derechos a la pensión de vejez.
- El Decreto N° 73-530, de 15 de junio de 1973, introduce mejoras en el régimen de pensiones para los mineros; en el texto se prevén primas por trabajo en galerías subterráneas para la adquisición del derecho a las pensiones de vejez y el cálculo de éstas y, en ciertas condiciones, se asimilan a los períodos de trabajo en minas subterráneas los períodos de interrupción del trabajo de los afiliados allí ocupados en el momento del accidente o de la enfermedad que hubiera determinado su incapacitación.

En dicho Decreto se establece, por otra parte, la revaluación de las rentas pagadas a los trabajadores con menos de 15 años de servicios probados, y se ofrece una garantía complementaria de evolución de las pensiones en función de los salarios.

- Por último, según el artículo 11 de la Ley presupuestaria de 1973 (N° 73-1128, de 21 de diciembre de 1973, Journal officiel de 23 de diciembre de 1973), por la que se rectifica la Ley presupuestaria de 1973, los ex trabajadores de las cuencas hulleras que hayan debido someterse a una readaptación profesional y que demuestren haber pertenecido durante un mínimo de 10 años al régimen especial de la seguridad social para los mineros podrán seguir afiliados a este régimen para los casos de enfermedad, defunción (subsidio) y gastos de maternidad, para los casos de invalidez, vejes y defunción (pensiones) o para el conjunto de estos casos.

3) Régimen para los funcionarios públicos

- En la Ley Nº 70-523, de 19 de junio de 1970, relativa al trabajo a tiempo parcial de los funcionarios públicos, por la que se modifica el código de pensiones pagadas a los jubilados civiles y militares, se dispone el cómputo de todo el período durante el cual se autoriza a los funcionarios a efectuar un trabajo a tiempo parcial para el establecimiento del derecho a la pensión, y de la mitad de ese período para la liquidación de la pensión.
  - En el artículo 12 de la Ley presupuestaria de 1973 (Nº 73-1128, de 21 de diciembre de 1973), se introducen ciertas mejoras en ese régimen con respecto al derecho de los huérfanos menores en caso de defunción del padre y de la madre, por una parte, y a los derechos del cónyuge superviviente y de los huérfanos de las funcionarias, por la otra.
- 4) Por último, en relación con la evolución de las prestaciones, conviene señalar que en el Decreto Nº 70-1277, de 23 de diciembre de 1970, se instituye un régimen complementario de jubilación para los funcionarios no titulares del Estado y de las colectividades públicas.

III. El derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia

El régimen francés concede prestaciones familiares a toda persona, francesa o extranjera, que ejerza una actividad profesional o que se encuentre en la imposibilidad de ejercerla y que, por las razones que sean, tenga uno o varios niños residentes en el territorio metropolitano a su cargo. Desde hace varios años se ha extendido, por una parte, el régimen de prestaciones familiares a un número creciente de beneficiarios y, por la otra, se ha aumentado la cantidad de prestaciones. Por lo demás, la cuantía de estas prestaciones es objeto de una revaluación anual para tener en cuenta la coyuntura económica.

Por Ley de 23 de diciembre de 1970 se establece el pago de un subsidio a los huérfanos y ciertas categorías de niños a cargo de uno de sus progenitores, subsidio que se suma a las prestaciones familiares ya previstas para esos casos, y cuya cuantía es doble para los huérfanos de padre y madre.

Por Ley de 13 de julio de 1971 se establecen dos nuevas prestaciones: una para los impedidos menores de 20 años, y la otra para las personas igualmente impedidas de 20 a 65 años. Se encuentra en examen un proyecto de ley de orientación de personas impedidas, cuya finalidad es resolver los problemas familiares y sociales que plantean estas personas.

En virtud de la Ley de 3 de enero de 1972, que comprende diversas disposiciones para mejorar la situación de la familia, se establecen varias prestaciones concretas. Por ese texto se modifica, en primer lugar, el subsidio pagado a los trabajadores cuyo sueldo constituye para la familia el único medio de subsistencia, y a la ama de casa con hijo. Como complemento de estos subsidios, se ha previsto un aumento para las familias de ingresos modestos con un hijo de menos de tres años, o con cuatro hijos.

El subsidio por gastos de guardería, creado por Ley de 3 de enero de 1972, se concede a las madres cuyos recursos no superen los estipulados y que dejen durante el día a sus hijos en guarderías o a cargo de personas autorizadas. Este subsidio representa un reembolso de los gastos hasta un máximo establecido.

Por la misma Ley se crea un seguro de vejez para la madre de familia que dedica su tiempo al cuidado de sus hijos, a quien corresponde el aumento anteriormente mencionado.

En ese texto se extiende igualmente el subsidio de alojamiento a nuevas categorías de beneficiarios.

Todas estas disposiciones han sido objeto de decretos de aplicación y han entrado en vigor. Es aún demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas acerca de las mejoras que han introducido, pero cabe señalar que éstas se destinan principalmente a los sectores menos favorecidos de la población.

IV. MEDIDAS ENCAMINADAS A ASEGURAR QUE DISFRUTE DE LOS DERECHOS MENCIONADOS EN LA PARTE III SUPRA UNA PROPORCION CADA VEZ MAYOR DE LA POBLACION SIN DISTINCION ALGUNA DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGION, OPINION POLITICA O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, POSICION ECONOMICA, NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICION

a) Por norma general, los trabajadores extranjeros y los miembros de su familia gozan, en el territorio francés, de los mismos derechos sociales que los nacionales. Por consiguiente, los acontecimientos de importancia que se hayan producido en el ámbito social durante el período en examen conciernen por igual a extranjeros y nacionales.

Quedan aún algunas excepciones a esta igualdad de derechos sociales, pero el Gobierno francés ha manifestado con toda claridad su intención de acabar rápidamente con las formas de discriminación que subsisten. Así, se están preparando varias medidas destinadas a extender a los extranjeros los beneficios de los subsidios de maternidad, la tarjeta de prioridad para las mujeres embarazadas y la tarjeta por la cual se concede a las familias numerosas una reducción de tarifas en los transportes públicos.

b) En cuanto al derecho a la libre elección del trabajo (punto 1 de la sección A de la parte III), conviene también hacer notar que en Francia se aplica a los extranjeros la reglamentación pertinente de la Ordenanza Nº 45-2685, de 2 de noviembre de 1945.

Esta reglamentación se funda en dos principios: el primero, que la mano de obra extranjera debe servir de complemento a la mano de obra nacional y que, antes de admitir que un extranjero ejerza una actividad profesional remunerada en una región, es preciso comprobar que no hay en el mercado laboral ningún trabajador disponible que pueda ocupar el puesto vacante (principio de complementariedad).

Conforme al segundo principio, todo extranjero con autorización para trabajar en Francia tiene derecho, como se ha precisado ya, a las mismas condiciones de trabajo y de remuneración que todo asalariado francés que ejerza la misma profesión en la misma empresa o, en su defecto, en la misma región (principio de no discriminación).



De conformidad con estos principios, un extranjero sólo puede trabajar en territorio francés con la autorización del Ministerio de Trabajo, expedida contra presentación de un contrato de trabajo visado por los servicios de dicho Ministerio antes del ingreso en el país del trabajador.

Cabe observar, sin embargo, que los derechos de los trabajadores extranjeros al ejercicio de actividades profesionales remuneradas se amplían a medida que se prolonga la estancia interrumpida y autorizada en el país y que, en último término, se les extiende un permiso permanente de trabajo, válido para todas las profesiones remuneradas, cuyo titular puede ejercer la actividad remunerada que elija en todo el territorio francés (con excepción de algunas profesiones reglamentadas para cuyo ejercicio se han fijado por ley requisitos particulares en relación con los diplomas y la nacionalidad). En la práctica, el titular del mencionado documento está asimilado a los nacionales.

La acción social concreta organizada o propiciada por las autoridades en provecho de los trabajadores extranjeros tienen por principal objeto permitirles gozar realmente de la igualdad de derechos sociales que se les concede. Desde 1969 se han adoptado medidas en relación con los cuatro sectores de la acción social concreta: acogida e información, alojamiento, actividades educativas y de promoción, y acción social especializada.

a) Acogida e información

Durante el período en examen la acogida de los trabajadores extranjeros ha estado principalmente a cargo de asociaciones especializadas instaladas en los lugares de acceso (estaciones de ferrocarriles, puertos, aeropuertos) y en las principales ciudades. Las autoridades, pese a reconocer los importantes servicios prestados por esas asociaciones, han juzgado útil coordinar las actividades de acogida creando una red nacional de acogida, información y orientación de los trabajadores extranjeros y sus familias. En los primeros meses de 1974 habían de instalarse oficinas de recepción en los Departamentos con una población extranjera numerosa.

En cuanto a la información, la Oficina Nacional de Inmigración, único órgano responsable de la entrada de trabajadores extranjeros en Francia, salvo ciertas categorías sujetas a un régimen especial, facilita folletos y guías prácticas a los trabajadores extranjeros antes de que emprendan viaje.

Por otra parte, desde 1968 se difundían programas radiofónicos en idioma extranjero para informar a los emigrantes. En 1972 se duplicó la duración de estas emisiones.

Todas estas actividades de información, que se ampliarán seguramente con la creación de una red nacional de acogida, ayudan y ayudarán cada día más a los trabajadores extranjeros a que ejerzan efectivamente los derechos sociales que se les ha reconocido.

b) Alojamiento

Es este sin duda alguna el sector que plantea mayores dificultades a los trabajadores extranjeros y en el que la intervención de las autoridades es más necesaria. Desde 1970 se ejecuta un programa para suprimir progresivamente las viviendas insalubres y fomentar la construcción de alojamientos para trabajadores solteros.

Desde 1968 en París y sus alrededores, y desde 1971 en varias otras grandes ciudades, se prevé la posibilidad de reservar cierto número de casas protegidas para fines de alojamiento de las familias.

Además, una Ley de 30 de junio de 1973, sobre el alojamiento colectivo, ayuda a evitar que los trabajadores extranjeros, a menudo obligados a aceptar condiciones de alojamiento inadmisibles desde el punto de vista de la higiene, de la seguridad y el precio, sigan siendo víctimas de esa explotación abusiva.

c) Actividades educativas y de promoción

Desde 1969 las asociaciones subvencionadas por las autoridades para organizar cursos de francés destinados a los extranjeros han extendido considerablemente sus actividades que, en 1973, beneficiaban a unas 50.000 personas. Por lo demás, gracias al perfeccionamiento de los métodos pedagógicos, seguramente se obtendrán mejores resultados cualitativos en los próximos años.

Desde 1971, en virtud de la ley sobre la formación profesional continua los extranjeros pueden seguir, en horas de trabajo, cursos de francés y de adaptación a la vida social y profesional. Las actividades previas a la formación profesional, que también se han ampliado, ofrecen a los trabajadores extranjeros la posibilidad de adquirir, al igual que los nacionales, una formación profesional.

d) Acción social especializada

Se trata sobre todo de la acción social para facilitar la adaptación de las familias a la vida en Francia. Los esfuerzos destinados a suprimir progresivamente la vivienda insalubre contribuyen a esta acción cuyo fin es facilitar la adaptación a un medio normal de las familias que vivían en tugurios.

Esta acción social, complemento de la acción emprendida en virtud del régimen general, está a cargo de asociaciones especializadas. La probable llegada de un número creciente de extranjeros procedentes de países muy distintos del de acogida (idioma, forma de vida, religión, costumbres, etc.) determinará sin duda la necesidad de mantener esta acción social especializada para que dichos trabajadores puedan gozar de la igualdad de derechos sociales.

El conjunto de medidas anteriormente indicadas, cuya finalidad es que los extranjeros gocen efectivamente de la igualdad de derechos sociales, no basta para resolver todos los problemas y es evidente que persisten ciertas dificultades (véase la parte V). Con todo no es posible movilizar recursos importantes en exclusivo provecho de los extranjeros sin suscitar reacciones xenófobas.

En los próximos años corresponderá a la red nacional de acogida, formación y orientación de los trabajadores extranjeros y sus familias una función decisiva en el mejoramiento de la situación de los trabajadores migrantes en Francia.

## EN EL AMBITO CULTURAL

En el ámbito cultural -al cual pertenecen escritores, artistas, músicos, etc.- el ejercicio del derecho a la seguridad social plantea problemas especiales que el Ministerio se ha esforzado en resolver progresivamente con miras a que todos los artistas lleguen a gozar de una seguridad que, en su caso, es quizá aún más indispensable que en el de otras profesiones.

### a) Escritores

Antes de la promulgación del Decreto de 30 de marzo de 1957 no había, en principio, ningún régimen de seguridad social para los escritores, ni tampoco se les aplicaba un criterio uniforme, pues se les consideraba asalariados a los efectos de la seguridad social, y trabajadores independientes a los efectos de los subsidios familiares. Como trabajadores independientes, contribuían trimestralmente con un tanto alzado

Pero una circular de 15 de diciembre de 1969, el Centro Nacional de Hombres de Letras, que pagaba ya a la seguridad social las contribuciones patronales, se hizo cargo también del pago de ese tanto alzado.

Los cuantiosos recursos de que dispone el Centro Nacional de Hombres de Letras han permitido este mejoramiento de la condición de los escritores y del mecanismo de sus seguros sociales. El Estado (los contribuyentes) sólo otorga una modesta subvención del 7% al presupuesto anual del Centro, y el resto procede de impuestos parafiscales (0,25% sobre el volumen de negocios de las editoriales, y 0,20% sobre los derechos de autor) y, en especial, en cumplimiento de lo dispuesto en una Ley de 25 de febrero, de una cesión de derechos sobre obras que, de otra manera, habrían pasado al dominio público, derechos cuya cuantía asciende a unos 100 millones de francos anuales (los herederos cobran los derechos de autor durante 50 años en principio, y durante 64 años y 273 días a título provisional; el Centro los percibe durante los 15 años siguientes, al cabo de los cuales las obras pasan al dominio público).

Por este procedimiento original, los escritores que siguen teniendo lectores tres cuartos de siglo después de su desaparición contribuyen a la subsistencia de sus colegas más jóvenes y menos afortunados. Con todo, se estudia la posibilidad de simplificar este sistema.

Conviene recordar que, al margen de los regímenes habituales de seguridad social, en casos urgentes y a título excepcional los escritores pueden obtener una suma complementaria de 1.500 francos e incluso, en ciertos casos, pensiones anuales, con arreglo al presupuesto del Estado.

b) Con anterioridad al período en examen, una Ley de 26 de diciembre de 1964 había instituido el régimen de seguridad social para los artistas (pintores, grabadores y escultores).

El carácter particularmente independiente de estas profesiones, para las que no es nada fácil determinar los ingresos reales, dificulta el cumplimiento de esta legislación.

Se ha conseguido, sin embargo, conceder a los artistas prácticamente las mismas ventajas que a los asalariados, en particular respecto del seguro de enfermedad (reembolso de los gastos de médico, farmacia y hospitalización) y de maternidad y del subsidio por defunción, sin distinción de nacionalidad, a condición de que los beneficiarios residan principalmente en Francia.

El primero de julio de 1969 el régimen contaba con 1.490 afiliados y el 30 de julio de 1973 con 2.314. En la actualidad, el 20% de los nuevos miembros se compone de jóvenes y la mayoría vive en las provincias; se estima que ya debe haber 3.000 afiliados. Tal vez sorprenda lo reducido de este número, pero hay que tener en cuenta que se trata de artistas verdaderamente profesionales (cuyos ingresos proceden, en más del 50%, del ejercicio de su arte) y que no pertenecen a ningún otro régimen de seguridad social (personal docente, asalariados, etc.).

Por las mismas razones, para fines de la caja de jubilación se tropieza también con dificultades al determinar el ingreso exacto de los miembros, pues la evolución en un sector, de suyo poco fácil de controlar, es a menudo imprevisible.

Con todo, la Caja de subsidios de vejez para los que ejercen las artes gráficas y plásticas es indiscutiblemente útil, pues gracias a ella ha podido organizarse un sistema de jubilación para una categoría de trabajadores que antes no podía acogerse a ella.

No obstante, se está estudiando la posibilidad de introducir modificaciones estructurales que hagan más ventajosa la relación entre las contribuciones y la escala de pensiones, y favorezca a quienes tengan mayor necesidad de ayuda al final de su carrera.

c) Por una Ley de 26 de diciembre de 1969, los artistas de espectáculo\* y modelos son objeto de nuevas disposiciones que modifican el código de seguridad social y les imponen la afiliación obligatoria a los seguros sociales, sin distinción de nacionalidad, a prorrata de la duración del contrato de trabajo.

#### C. El derecho a un nivel de vida adecuado

5. Derecho a la protección y al mejoramiento del medio ambiente.

A. Actividades de renovación del medio urbano desplegadas por el Ministerio de Asuntos Culturales

a) La Dirección de Arquitectura se ocupa en la promoción de la arquitectura moderna: controla la reglamentación y el ejercicio de la profesión de arquitecto, examina la calidad de los proyectos arquitectónicos ejecutados o subvencionados por el Estado y vigila la construcción y la conservación de edificios civiles de propiedad del Estado. En 1971 y 1972 sus actividades se centraron principalmente en la iniciación del programa de investigaciones arquitectónicas por el Comité de Investigaciones y fomento de la arquitectura, que ha emprendido 17 operaciones.

---

\* Artistas líricos, dramáticos, coreográficos, de variedades, de complemento, músicos, chansonniers, (compositores-intérpretes de canciones satíricas), directores de orquesta, orquestadores, directores de escena, etc.

Con asistencia del Instituto de protección del medio ambiente, se realizaron investigaciones fundamentales sobre el análisis de la calidad arquitectónica y sobre el estudio de nuevas concepciones, mientras que las nuevas ciudades ofrecieron un campo de acción excepcional para la experimentación.

Se ejecutó toda una serie de medidas de asistencia arquitectónica a ciudades o barrios, ya con arreglo a programas de renovación (Moulins, Concarneau, Autun) o mediante la organización de concursos (Annecy, Montauban, San erre).

Diversos estudios tenían por objeto despertar el interés del público en los problemas de la arquitectura moderna; entre los resultados de esos trabajos cabe mencionar la publicación, en 1973, de una guía de la arquitectura contemporánea de París y sus alrededores (en plena expansión).

b) Por su parte, el Servicio de enseñanza de la arquitectura y las artes plásticas, que forma a los principales artífices del futuro medio urbano, ha emprendido una doble acción; por un lado, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución del Consejo Económico y Social, de 28 de julio de 1965, ha mejorado el acceso a la educación reduciendo a seis años, a partir de 1969, los estudios universitarios de arquitectura, que solían durar de ocho a diez años (aunque con anterioridad a esa fecha existía ya un sistema de becas idéntico al instituido por el Ministerio de Educación Nacional, en 1971 aumentó el número de becarios y por otra parte, ha dado la posibilidad de obtener el título de arquitecto, mediante una formación teórica complementaria, a las personas que, en la práctica, ya ejercen la profesión\*.

Por otra parte, se ha iniciado simultáneamente una reforma fundamental de los estudios de arquitectura (disposiciones promulgadas en septiembre de 1971), que modificará el ejercicio de la profesión y contribuirá al mejoramiento del medio urbano.

B. Creación de un Ministerio especial para la protección de la naturaleza y del medio ambiente

Para dotar de medios a este nuevo Ministerio, establecido por Decreto de 7 de enero de 1971 se ha creado, en particular, un fondo de mejoramiento y protección de la naturaleza y el medio ambiente. Esas nuevas instituciones han probado rápidamente su eficacia, por lo que respecta tanto al mayor interés manifestado por el público y las administraciones, como a la intervención práctica en materia de ordenación urbana, protección de los espacios verdes y de las aguas, etc.

D. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Medidas adoptadas para lograr:

- 1º) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el logro del sano desarrollo de los niños.

---

\* Bajo otro punto de vista, estas innovaciones se aplican también al punto 2 de la parte F de la sección II.

#### A. Reducción de la mortinatalidad

Cabe recordar que la tasa efectiva de mortinatalidad corresponde al número efectivo de mortinatos por cada 1.000 nacimientos durante el período de examen. En 1965 esa tasa era de 15,20 por mil, en 1969 de 13,80 por mil, en 1970 de 13,2 por mil, en 1971 de 12,9 por mil y en 1972 de 12,5 por mil.

El estudio efectuado en 1970 sobre la racionalización de las asignaciones presupuestarias para la asistencia perinatal tenía por objeto determinar las actividades que permitiesen atenuar los efectos humanos, económicos y financieros de las defunciones y los impedimentos físicos y mentales debidos a accidentes del embarazo y del parto. Gracias a ese estudio, entre otras cosas, se han puesto en evidencia las causas puramente endógenas de mortinatalidad, es decir, los factores de mortalidad congénitos, que unas veces son transmitidos por la madre y otras se manifiestan en el momento del parto; las causas de la mortalidad fetoinfantil pueden, en cambio, ser endógenas y exógenas; estas últimas comprenden los factores de mortalidad presentes en el medio de vida del niño. Es ésta una distinción interesante, pues entre 1950 y 1967 se invirtió el orden de importancia de estas dos principales causas de defunción: a los factores endógenos que provocaban hace 20 años un tercio de las defunciones, podría atribuirse la mitad hace 15 años y tres cuartos en 1967.

Por tanto, hubo que combatir las causas "endógenas", es decir, las malformaciones congénitas, las lesiones obstétricas, la asfixia y la prematuridad. La ejecución de las medidas previstas en el programa que fue preparado sobre la base de este estudio, la modificación de las condiciones de los reconocimientos prenatales, el mejoramiento de los servicios de maternidad y, en especial, de las condiciones de reanimación en la sala de partos han contribuido y contribuirán aún, sin duda alguna, a reducir la tasa de mortalidad. En la respuesta al punto 2 de la sección E (Derecho de las madres a cuidados y asistencia especiales) se hallarán otros detalles.

#### B. Reducción de la mortalidad infantil y vigilancia del desarrollo del niño

La tendencia a la disminución de la mortalidad infantil observada en Francia desde 1945 es consecuencia de una serie de actividades desplegadas en una gran variedad de ámbitos: perfeccionamiento del equipo médico-social, mejoramiento de los métodos terapéuticos, educación sanitaria de la madre, elevación del nivel de vida, etc.

En 1946 la tasa de mortalidad infantil era de 77,8 por mil.

En 1969 había bajado a 18,2 por mil y en 1972 a 16 por mil.

La desaparición casi total de las enfermedades carenciales y la importante disminución de las infecciones permiten que los servicios de Francia se dediquen en la actualidad a actividades de diagnóstico precoz de las deficiencias y los casos de inadaptación.

Entre las diferentes medidas médico-sociales preventivas a favor de la madre y del niño adoptadas desde 1969, conviene mencionar las previstas en la Ley N° 70-633 de 15 de julio de 1970, sobre la extensión obligatoria de certificados de salud con ocasión de ciertos exámenes médicos preventivos. En esta Ley, completada por los Decretos N°s S 73-267 y 261, de 2 de marzo de 1973 se dispone, en efecto, la extensión de certificados médicos a raíz de ciertos exámenes preventivos de los niños en edad

preescolar; se trata de tres exámenes que se efectúan, respectivamente, en los ocho días siguientes al nacimiento, en el curso del noveno mes y en el curso del vigésimo cuarto mes, es decir, en períodos críticos o considerados de gran importancia para el desarrollo del niño.

Los certificados de salud pueden llevar la firma del médico de cabecera o del médico de un servicio de pediatría. En el primer caso se trata de una consulta privada y en el segundo de una consulta pública organizada por el servicio departamental de protección a la madre y al niño.

Los exámenes de esa clase practicados en los servicios públicos son gratuitos para la familia y, en el caso de las consultas particulares, los organismos de seguridad social reembolsan la totalidad del costo.

Los certificados constan de un cuestionario al que los médicos deben responder una vez efectuado el examen del niño. Esas respuestas facilitan varios datos fundamentales, y eventuales indicaciones de la existencia de factores patológicos o de anomalías evidentes o presuntas, cuya confirmación o carencia de fundamento deberá establecerse mediante exámenes complementarios o especializados.

Una vez extendido el certificado, el médico debe dirigirlo, con la indicación "confidencial", al médico jefe del servicio departamental de protección a la madre y al niño, que reúne y ordena estos documentos en espera de que el sistema de informática, introducido ya en cierto departamentos, se extienda a todo el territorio francés.

Estos certificados tienen un doble interés:

- Por una parte, facilitan, a nivel departamental primero y nacional luego, una mejor información estadística y epidemiológica sobre los problemas del niño, con miras a una planificación de los programas de suministro de equipo y de formación de personal mejor adaptada a las necesidades de la población. Estos datos epidemiológicos permiten también efectuar comparaciones entre las diferentes regiones de Francia y otros países, y establecer normas de desarrollo del niño y criterios de riesgo.
- Por otra parte, permiten asimismo el diagnóstico precoz de enfermedades causantes de invalidez y de casos de inadaptación, merced al cual puede preverse con la mayor rapidez posible un tratamiento o un método de readaptación y una vigilancia especial de los casos presuntos o confirmados de enfermedad.

3. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales, etc., y la lucha contra ellas

#### LUCHA ANTITUBERCULOSA

En Francia, aunque la población extranjera no supera el 7% del total, más de un quinto de los tuberculosos son extranjeros y casi la totalidad de estos enfermos son trabajadores.

Los trabajadores extranjeros y sus familias gozan de los mismos derechos que los nacionales a recurrir a los servicios de diagnóstico precoz, prevención, tratamiento y, en su caso, readaptación socioprofesional.

Sin embargo, hay motivos para suponer que estos trabajadores y sus familias corren graves riesgos, debido, por una parte, a los trastornos provocados por el trasplante a un nuevo medio y las dificultades de adaptación, y por la otra, a sus condiciones socioeconómicas de vida.

Por tanto, las actividades de prevención y diagnóstico precoz se dirigen de preferencia a esos trabajadores y sus familias, y también a las demás categorías de nacionales especialmente propensos a esas enfermedades.

Con todo, se ha tropezado con dificultades para el tratamiento de los enfermos.

El trabajador inmigrante, una vez que ha recibido el tratamiento hospitalario de ataque a la enfermedad, y previa desaparición de los bacilos del esputo, debe reanudar su trabajo cuanto antes. Ahora bien, el tratamiento es largo y costoso, y su estrecha vigilancia requiere una colaboración entre los servicios antituberculosos; en ocasiones los médicos particulares y, principalmente, los servicios de higiene del trabajo, colaboración que no siempre es fácil lograr.

Además, como los medicamentos, en lugar de distribuirse gratuitamente son reembolsados en un 100%, los enfermos tropiezan con grandes dificultades administrativas y financieras, a las que procuran poner remedio los servicios competentes.

E. El derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia

2. Derecho de las madres a cuidados y asistencia especiales, incluso al suministro de servicios de puericultura adecuados que permitan que las mujeres sigan carreras

DERECHO DE LAS MADRES A CUIDADOS Y ASISTENCIA ESPECIALES

A) En primer término, cabe señalar a este respecto la importancia de las disposiciones de la Orden de 27 de agosto de 1971, acerca de los exámenes médicos prenatales y posnatales con el fin de mejorar la vigilancia de todas las mujeres embarazadas. En virtud de esa Orden se modifican las condiciones en que deben efectuarse los exámenes prenatales obligatorios y, en particular, se aplaza el control radiológico pulmonar obligatorio, del tercero al sexto mes del embarazo. Este control, al igual que el previsto para el examen posnatal, debe efectuarse no por radioscopia sino por radiografía o radiofotografía.

Las disposiciones más importantes del texto versan sobre la determinación de los grupos sanguíneos y, en particular, del grupo RH, y sobre las consecuencias de una isoimmunización. Se establece asimismo la prevención de las incompatibilidades sanguíneas mediante la utilización de gammaglobulinas anti-D.

A raíz de un estudio efectuado en 1970 sobre la racionalización de las asignaciones presupuestarias para la asistencia prenatal, se estableció un programa definitivo de asistencia perinatal para el período de ejecución del VI Plan. Se adoptaron siete medidas con objeto de reducir las tasas de mortalidad y de morbilidad perinatales. Varias de esas medidas tienen por finalidad mejorar la vigilancia de la mujer embarazada y las condiciones del parto.

Cabe señalar que, en relación con las mujeres para las que el parto presenta riesgos importantes:



- a) Se ha intensificado la vigilancia prenatal aumentando el número de consultas; las mujeres para las que el embarazo presenta riesgos pueden someterse a los exámenes complementarios y especializados que en su caso requiera en servicios hospitalarios (por lo general, centros hospitalarios regionales que han concluido convenios con los servicios de protección a la madre y al niño). De este modo, la proporción de gastos resultantes de estos exámenes que no reembolse la seguridad social pasa a la partida de gastos obligatorios de protección a la madre y al niño. Ya se han concluido unos 20 convenios con una docena de establecimientos hospitalarios. Por lo demás, este año se procurará establecer medios para cubrir los gastos de hospitalización preventiva de las mujeres cuyo embarazo encierre riesgos importantes.
- b) Se han creado centros de vigilancia de los casos de esta índole mediante la concesión de subvenciones a los establecimientos hospitalarios para la compra de material especializado en los servicios pertinentes.

Por otra parte, los servicios del Ministerio han exhortado a las autoridades regionales y departamentales competentes y, en particular a los servicios de protección a la madre y al niño, a que, por diversos medios, garanticen una mejor protección a estos grupos. Han fomentado, en especial, el mejoramiento de la educación sanitaria general, e insistido en el interés que revisten los métodos de parto psicoprofiláctico, en la importancia de los exámenes prenatales, en la ayuda a domicilio a las mujeres embarazadas mediante la contratación de asistentas especializadas, en la importancia del amamantamiento y en las necesidades especiales de las familias migrantes. Han señalado igualmente a la atención de los servicios departamentales de protección a la madre y al niño la importancia del diagnóstico precoz de la toxoplasmosis y de la rubéola en las futuras madres.

## 2.b) Servicios de puericultura adecuados que permitan que las mujeres sigan carreras

El cuidado de los niños que aún no han llegado a la edad de la escolaridad obligatoria y, más especialmente, los menores de tres años, plantea un problema muy agudo a las madres de familia que ejercen una actividad profesional.

La madre que trabaja debe procurarse, por sus propios medios, personal de vigilancia a domicilio, o dejar a su niño al cuidado de una nodriza o de una persona a la que deben mantener, o recurrir a servicios colectivos, a menudo creados por iniciativa de organismos privados o de las colectividades locales.

Las guarderías, establecimientos colectivos en los que se aceptan durante el día, en las horas de trabajo de la madre, niños menores de tres años, comprenden principalmente:

- Las guarderías colectivas, instaladas en locales que responden a las condiciones estipuladas por ordenanza, que funcionan con arreglo a normas muy precisas, sobre todo en lo relativo al personal;
- Las guarderías familiares: según este sistema, los niños quedan a cargo de un grupo de personas autorizadas, que actúan bajo la vigilancia de un personal calificado que trabaja a tiempo completo. Ultimamente se ha reconocido oficialmente este tipo de instituciones, que hace poco tenían carácter experimental, y se ha reglamentado su funcionamiento (Orden de 22 de octubre de 1972.)

Las guarderías ocasionales, que reciben durante el día, por tiempo limitado y sin carácter permanente, a niños de tres meses a cinco años cumplidos. En la mayoría de los casos, este tipo de establecimientos no puede resolver los problemas de las madres que trabajan.

De hecho, la solución más satisfactoria para esas mujeres es la colocación del niño en una guardería colectiva o familiar, y la demanda de esta categoría de establecimientos va en aumento:

- en 1968 había 567 guarderías para 23.572 niños;
- en 1972 había 727 guarderías con capacidad para 32.828 niños, y en diciembre de 1973 el número de guarderías colectivas era de 727 para 40.000 niños; el número de guarderías familiares era de 234 para 10.000 niños.

Hay 566 guarderías ocasionales con capacidad para 11.350 niños. Las actividades desplegadas en los cinco últimos años han permitido duplicar con creces la capacidad de esos establecimientos para niños cuyas madres trabajan fuera del hogar; no obstante, son aún insuficientes para atender la demanda. En consecuencia, es necesario, además de esas actividades, buscar soluciones de otro tipo; precisamente, la cuestión se estudia desde varios ángulos.

Junto a estos servicios institucionalizados (guarderías colectivas y familiares y guarderías ocasionales) hay una oferta abundante, aunque bastante mal definida, de servicios de nodrizas y de personal para la vigilancia de niños. El número de nodrizas autorizadas supervisadas por el personal de protección a la madre y al niño se eleva a casi 165.000 (en 1º de enero de 1972); estas nodrizas tienen a su cuidado cerca de 250.000 niños, de los cuales se estima que unos 150.000 (vigilados por nodrizas u otro personal autorizado) son menores de tres años.

Por último, hay que tener también en cuenta que en las escuelas de párvulos dependientes del Ministerio de Educación Nacional ingresan anualmente 125.000 niños de menos de tres años.

"Derecho de los padres a determinar libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos"

El derecho a la planificación de la familia responde a una de las preocupaciones de la OMS, cuyos trabajos han permitido demostrar que un atinado espaciamiento de los nacimientos contribuye a una mejor salud física y mental, tanto de la madre como de los hijos nacidos o por nacer y favorece, en general, el equilibrio y la armonía del grupo familiar.

Puede pues interpretarse la planificación de la familia en la más amplia acepción del término, como la limitación de la fecundidad y el espaciamiento de los nacimientos y, al mismo tiempo, como el tratamiento de la esterilidad involuntaria. La planificación de la familia constituye un medio importantísimo para la prevención de la mortalidad y la morbilidad maternoinfantiles y, vista desde un ángulo más positivo, contribuye al mejoramiento de la calidad de la vida.

Se ha fundado en este enfoque la publicación de los diferentes textos que reglamentan la aplicación de la Ley, de 28 de diciembre de 1967, sobre la regulación de la natalidad. Se están creando en todo el territorio de Francia las estructuras de acogida previstas en esa legislación y ya se han recibido anuncios de apertura procedente de más de 200 establecimientos de información, de consulta o de asesoramiento familiar, y hay más de 60 centros autorizados de planificación o de educación de la familia. Estos centros cumplen las siguientes funciones:

- a) Educación de la familia (problemas de relaciones conyugales, de esterilidad involuntaria, de maternidad, del parto, etc.);
- b) Información sobre los métodos de regulación de la natalidad;
- c) Consulta e intervención para facilitar la natalidad y para su regulación.

Por otra parte, en virtud de la Ley Nº 73-639 de 11 de julio de 1973 se ha creado el Consejo Superior de información sexual, de regulación de la natalidad y de educación de la familia.

En el Decreto Nº 74-1 de 3 de enero de 1974, y en la Orden de 26 de febrero de 1974 se precisan las modalidades del funcionamiento de dicho Consejo y su composición. El Consejo tiene a su cargo el enlace entre las asociaciones y los organismos que cumplen funciones de información y de educación sobre problemas sexuales y de regulación de la natalidad, cuya actividad apoya y coordina, con el respeto debido a las convicciones individuales. El Consejo ejecuta, dispone y centraliza estudios e investigaciones sobre información sexual, regulación de la natalidad, educación de la familia y formación y perfeccionamiento de personal docente calificado. Propone a las autoridades las medidas que han de adoptarse para mejorar la información de jóvenes y adultos acerca de los problemas de educación familiar y sexual, de regulación de la natalidad, de adopción y responsabilidad de la pareja, para fomentar la educación sexual de los jóvenes respetando siempre el derecho de los padres, y para apoyar y promover las actividades de formación y perfeccionamiento de personal docente calificado.

El Consejo está compuesto de 45 miembros; celebró su primera reunión en marzo de 1974 y comprende cuatro comisiones: la comisión de finanzas, la de información, la de formación y la de investigaciones.

#### POLITICA RELATIVA A LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA

Durante el período examinado las actividades en favor de las personas de edad avanzada se han convertido en prioritarias a causa de:

- la urbanización y el desarraigo;
- el crecimiento del número de ancianos y, especialmente, de las perspectivas demográficas referentes al número de personas de edad muy avanzada.

Estas actividades siguen tres orientaciones principales:

1º) Asegurar a las personas de edad avanzada un umbral de recursos suficiente y sencillo:

- mínimo social garantizado para el anciano;
- su revalorización;
- supresión de la referencia a la obligación alimentaria.

2ª) Mantener todo el tiempo que sea posible a las personas de edad avanzada en su marco de vida y su domicilio:

- ayuda para la vivienda: subsidio para la vivienda, pequeñas viviendas protegidas;
- intervención a domicilio: asistencia doméstica;
- equipos ligeros y abiertos en el marco de los sectores de acción gerontológicos;
- 330 sectores en cinco años, 86 de ellos en 1974;
- hogar, restaurante, clubs, centros diurnos, etc., en cada sector.

3ª) Alojar y cuidar a las personas que han perdido su autonomía vital:

- conversión de asilos de personas de edad avanzada en instituciones médicas;
- desarrollo de los centros de curas y asistencia facultativa.

F. Derecho a la educación

PREAMBULO:

En Francia, la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años de edad. Así pues, las familias no sólo tienen el derecho a la enseñanza para sus hijos, sino que la propia enseñanza es una obligación hasta dicha edad.

Después de esa edad la igualdad de acceso se garantiza a todos los niveles de la enseñanza con arreglo a los criterios expuestos más adelante.

Por último, la familia puede elegir, a cualquier edad y a cualquier nivel, entre la enseñanza pública y la enseñanza privada. En los establecimientos públicos la enseñanza es gratuita y la gratuidad de los materiales escolares se va ampliando progresivamente. Los establecimientos privados que suscriban contratos con el Estado cuentan con una ayuda económica oficial bastante considerable. De este modo, la familia puede ejercer su derecho a elegir entre los dos tipos de enseñanza (pública o privada), un derecho consolidado por un régimen de becas de enseñanza asignadas a las familias cuyos recursos financieros lo justifican.

I. LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

1) Derecho a la enseñanza primaria gratuita

La enseñanza elemental, que concierne a los niños de 6 a 11 años, entra en el marco de la obligación escolar. La admisión en la enseñanza pública es, por tanto, un derecho. En principio, el niño debe asistir a la escuela elemental de su sector geográfico.

2) Derecho a la enseñanza después de la escuela elemental

Una vez terminada la enseñanza elemental, todos los niños, salvo los minusválidos que necesiten una enseñanza especializada, han de acogerse a la enseñanza media.

Hasta los 16 años de edad se mantiene obligatoriamente al niño en uno de los tipos de enseñanza media y los padres ejercen su posibilidad de elección en las condiciones que se describen en la sección III. Cumplidos los 16 años, el niño puede seguir en la enseñanza media (general o técnica) según su capacidad y sus aspiraciones.

## II. DERECHO A LA IGUALDAD DE ACCESO A LA ENSEÑANZA SUPERIOR

El principio de la igualdad de acceso a la enseñanza superior, con arreglo a la capacidad o el mérito, incluso la enseñanza técnica y profesional, está consagrado en los textos. Para ingresar en ella es necesario tener el bachillerato, diploma que se obtiene al terminar los estudios de enseñanza media. También puede ser admitido cierto número de alumnos sin diploma de bachiller, después de pasar satisfactoriamente un examen.

El alumnado de las secciones de técnicos superiores pasó de 19.853 estudiantes al principio del curso de 1966, a 22.105 en 1972. Al mismo tiempo, los alumnos de los Institutos Universitarios de Tecnología pasaron de 1.678 en 1966, a 35.422 al comienzo del curso de 1972. Estas cifras sólo prueban un aumento de la cifra bruta que, de por sí, no es muy significativa.

La igualdad de acceso a los estudios superiores no es un problema de carácter estrictamente pedagógico sino, esencialmente, socioeconómico. En este sentido, la evolución de los porcentajes de estudiantes clasificados por origen familiar socio-profesional en comparación con el número de trabajadores en activo por categoría socioprofesional revelaría mucho mejor la tasa de democratización de la enseñanza superior que las cifras citadas supra.

La Dirección designada para esos fines ha efectuado recientemente una encuesta detallada sobre la cuestión. En cuanto al origen social de la corriente formada por los alumnos que entraban a primer año de enseñanza técnica superior, la encuesta dio los resultados indicados a continuación, pero, desgraciadamente, no se hizo la comparación con los grupos correspondientes de la población activa:

<u>Categoría socioprofesional</u> <u>del cabeza de familia</u>	<u>Porcentaje de la corriente</u> <u>de ingreso en el primer año</u> <u>al comienzo del curso</u> <u>de 1972</u>
Agricultores .....	9,3%
Obreros agrícolas .....	0,9%
Patronos industriales y comerciales .....	9,2%
Profesiones liberales .....	4,5%
Personal directivo superior .....	7,8%
Personal directivo medio .....	17,1%
Empleados .....	21,2%
Obreros .....	17,9%
Otras categorías .....	12,1%
	<hr/> 100,0%

Por otra parte, la asignación de becas a los alumnos de estas secciones es un elemento importante en relación con la igualdad de acceso a la enseñanza. Según una ficha reciente del Servicio central de estadísticas y de sondeos, al comienzo del curso de 1972-1973 había 7.998 estudiantes becados en las secciones públicas y 603 en las secciones privadas, cantidad un tanto superior a una tercera parte del alumnado total de las secciones de técnicos superiores.

### III. DERECHO DE LOS PADRES A ESCOGER EL TIPO DE EDUCACION QUE HABRA DE DARSE A SUS HIJOS

#### 1) Admisión al primer ciclo de la enseñanza media

Las modalidades de esta admisión se especifican por Decreto de 10 de marzo de 1972. En el primer ciclo, una comisión de admisión aprueba el ingreso del alumno después de examinar un historial en el que, entre otras cosas, constan los deseos de la familia acerca del tipo de pedagogía, la lengua viva, y el régimen (interno, externo o semi-interno) deseado. La comisión decide si admite el alumno o si éste debe seguir en la enseñanza primaria; en este caso, la familia puede recurrir y solicitar un examen.

La Comisión también da su opinión acerca del tipo de pedagogía que juzga acertado. Al comienzo del año escolar, el jefe del establecimiento de admisión distribuye a los alumnos en función de los juicios emitidos por la comisión. Al final del trimestre el consejo de curso da su opinión acerca de los posibles cambios de sección con referencia especial a las peticiones formuladas por las familias.

#### 2) Reglamentación de la reforma de la enseñanza en 1959 al nivel del primer ciclo de la enseñanza media

Por el Decreto de 6 de enero de 1959 y el Decreto (modificado) de 2 de junio de 1960 se definen los derechos de la familia en materia de orientación al nivel del primer ciclo (del primer curso al cuarto. En todos los casos se invita a la familia a que presente solicitudes sobre el tipo de enseñanza deseado. En primer lugar, las solicitudes son examinadas por el consejo de clase; después se presentan a un consejo de orientación, que reúne, entre otros, a todos los profesores del curso de que se trate, el asesor de orientación, el médico de sanidad escolar y el asistente social escolar.

"Si la familia acepta el juicio emitido por el consejo de orientación, el alumno ingresa con plenos derechos en el curso recomendado... si la familia cree que debe elegir un tipo de enseñanza que le ha sido desaconsejado por el consejo de orientación, el alumno se presenta a un examen de admisión." (Artículo 23 de la Orden de 2 de junio de 1960.)

#### 3) Reglamentación establecida por los nuevos procedimientos de orientación

Por Decreto y Orden de 12 de febrero de 1973 se definen los nuevos procedimientos de orientación para los cursos del primer ciclo de la enseñanza media y el quinto curso. Estos procedimientos se aplican en 20 departamentos durante el presente curso escolar (1973-1974).

Como en el sistema anterior, el consejo de curso está encargado de examinar las solicitudes de las familias y emitir un juicio de orientación.

"Si responde a la solicitud o cuenta con la aceptación de la familia, la propuesta del consejo de curso adquiere el valor de decisión de orientación... De lo contrario, los motivos invocados por el consejo de curso se comunican a la familia y ésta puede ver al profesor director o al profesor encargado del curso y, si así lo desea, con el director del establecimiento o su representante."  
(Artículo 8 de la Orden.)

"En caso de persistir el desacuerdo, la familia puede elegir entre dos soluciones:

- someterse al arbitraje de la comisión de apelación dispuesta en el artículo 7 del presente Decreto;
- pedir que se someta al alumno a un examen organizado por el inspector de distrito. En este caso, el resultado del examen determina la decisión de orientación.

De todas formas, si se propone la repetición del curso, la familia sólo puede recurrir al arbitraje de la comisión de apelación." (Artículo 6 del Decreto.)

Cabe señalar, no obstante, que la decisión de orientación se refiere a los "tipos de enseñanza" definidos en el artículo 7 del Decreto; la familia sólo puede recurrir contra ella.

#### 4) Reglamentación al nivel del segundo ciclo de la enseñanza media

El Decreto de 12 de junio de 1953 sigue en vigor a nivel:

- de los cursos quinto, sexto y final en los departamentos que aún no aplican los nuevos procedimientos de orientación;
- de los cursos sexto y final en los departamentos que aplican estos nuevos procedimientos.

El Decreto dispone que las decisiones de final de curso sean tomadas por el director del establecimiento a propuesta del consejo de curso.

"El consejo de curso propone:

- que el alumno sea admitido en el curso superior;
  - que el alumno sea sometido, al principio del curso siguiente, en octubre, a un examen de admisión según lo dispuesto en el artículo 3 del presente Decreto;
  - que se invite al alumno a repetir el curso que haya seguido durante el año escolar transcurrido;
  - que se invite a la familia del alumno a orientarlo por otra vía."
- (Artículo 2 del Decreto de 12 de junio de 1953.)

5) Niños inadaptados

Aunque las comisiones médicopedagógicas competentes proponen las medidas necesarias, la familia sigue conservando su libertad de decisión.

Desarrollo de los estudios de música

- a) Si bien es difícil clasificar esta innovación precisamente en uno de los párrafos previstos en el presente epígrafe, conviene señalar la creación (a petición del Ministro de Asuntos Culturales), en virtud del Decreto de 25 de noviembre de 1972, del bachillerato de técnico de música. Esta fórmula facilita los estudios musicales y la matriculación de los músicos porque suprime el grave riesgo que suponía una especialización prematura que, en este caso, es indispensable. Si sus aptitudes no le permiten proseguir una carrera musical, el titular de este bachillerato puede orientarse por otra vía sin pérdida de tiempo; su diploma le califica especialmente en materia de música y, al mismo tiempo, le abre las demás carreras universitarias, tanto literarias como científicas. Desde el año escolar 1972-73, este tipo de enseñanza ha interesado a 4.000 niños.
- b) La enseñanza musical propiamente dicha ha experimentado una expansión brusca. En 1968 existían 45 establecimientos de enseñanza musical controlados por el Estado, y en 1973 había 74 (16 conservatorios regionales, 41 escuelas nacionales y 16 escuelas municipales de enseñanza media y el Conservatorio Nacional Superior).

G. El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural

La principal dificultad que entorpece el ejercicio de este derecho parece situarse en el período inicial de una carrera artística, en los comienzos de una innovación de carácter cultural. Así pues, se han fundado diversas instituciones nuevas e importantes para facilitar la aparición de un talento o los principios de una empresa.

- a) El Fondo de Intervención Cultural, cuyo carácter y financiación interministeriales han sido mencionados (en la sección I), aporta una ayuda de iniciación, no renovable y con efecto multiplicador, para las iniciativas interesantes que no podrían organizarse sin apoyo exterior.

Creado en 1971, el F.I.C. había participado, al 30 de enero de 1973, en la financiación de 162 experimentos, a los que había contribuido con una ayuda de 28 millones de francos para unos gastos totales de 112 millones de francos, en cuatro ámbitos principales: iniciación artística (en el marco escolar), nuevas formas de actividades culturales, utilización de los métodos audiovisuales para fines culturales, mejora del marco de vida (urbano y rural).

- b) La ayuda a la primera exposición (atribuida por una comisión consultiva creada en junio de 1971) no es sino uno de los medios empleados durante este período por el Servicio de Creación Artística para despertar el interés del público de París y de las provincias por las obras interesantes que, sin tal intervención, no hubieran podido darse a conocer.

Durante este período pueden señalarse 38 exposiciones (en su mayoría ambulantes) de artistas de valía que, por su temperamento u otros motivos, no tenían acceso a las salidas comerciales corrientes.



- c) La ayuda a la creación dramática y musical no es una novedad pero se ha desarrollado mucho durante el período examinado y ha cobrado formas nuevas.
- 2. Derecho a la protección de los intereses morales y materiales que resulten de las producciones científicas, literarias o artísticas
- a) Derechos de autor

Conviene referirse aquí a los apartados a) y b) de la sección II, que constituyen las modificaciones más importantes al régimen de protección de los creadores.

b) Centro Nacional de Hombres de Letras

Por otra parte, hay que tomar nota de la transformación, con fecha 14 de junio de 1973, de la antigua Caja de las Letras en el Centro Nacional de Hombres de Letras, cuyas nuevas atribuciones son una innovación importante en materia de protección de los intereses materiales y morales del escritor.

El Centro no sólo está encargado de asegurar el respeto a las obras literarias (sea cual fuere el país de origen) después de la muerte del autor, de asignar pensiones y socorros, de favorecer las reediciones y la difusión literaria, sino también de aplicar las medidas para favorecer la creación y todas las disposiciones de orden social o económico adoptadas en favor de los escritores.

IV. MEDIDAS ENCAMINADAS A ASEGURAR QUE DISFRUTE DE LOS DERECHOS MENCIONADOS EN LA PARTE III SUPRA UNA PROPORCION CADA VEZ MAYOR DE LA POBLACION, SIN DISTINCION ALGUNA DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGION, OPINION POLITICA O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, POSICION ECONOMICA, NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICION

A) En Francia, lo que entorpece el logro de una verdadera igualdad en materia de acceso a la cultura no son las distinciones de raza, opinión, etc., citadas en el título de la sección IV, sino esencialmente -como en muchos otros países- dificultades de hecho y, especialmente, las diferencias de las distancias entre los consumidores y los productores de los bienes culturales.

Esta desigualdad de hecho se combate en dos frentes:

- a) Los responsables del Ministerio de Asuntos Culturales se dieron cuenta -en el período considerado- de la posibilidad de "llegar" a la mayoría del pueblo francés en breve (1973) gracias a la multiplicación de los receptores de televisión. A fin de organizar más eficazmente y aumentar el contenido cultural de las emisiones de televisión, firmaron, el 26 de marzo de 1971, una Carta con la ORTF. En la sección I ya se han mencionado los resultados de esa gestión.
- b) En el marco de una amplia política de descentralización, que interesa a toda la administración nacional, se ha afirmado netamente la regionalización de la administración de los asuntos culturales durante el período considerado.

A nivel de todas las regiones ya había un funcionario de alguna de las administraciones dependientes del Ministerio (arquitectura, archivos, etc.) que añadía a sus atribuciones normales las de corresponsal permanente del Ministro de Asuntos Culturales.

Ya en 1969 se sintió la necesidad de nombrar a este efecto funcionarios que no tuvieran a su cargo ninguna tarea técnica especial. Se emprendieron tres experimentos para preparar la creación de puestos de directores regionales de asuntos culturales, encargados de asesorar a los prefectos, de fomentar la acción cultural y de coordinar los servicios locales pertenecientes al Ministerio de Asuntos Culturales. Pese a que no se han definido detalladamente los estatutos y atribuciones de estos nuevos funcionarios para poder aprovechar el período experimental de prueba, en 1972 se crearon dos direcciones regionales y en el presupuesto de 1973 figuraban otras tres.

B) Efectivamente, la aplicación de este principio de descentralización ha permitido acrecentar el número de beneficiarios de la cultura, a título, tanto de consumidores como de productores.

En la parte I se ha indicado las cifras correspondientes a los resultados, a menudo notables, de esta acción; conviene precisar aquí algunos de sus aspectos esenciales:

a) La descentralización teatral

De hecho, esa descentralización es anterior al período examinado y se caracteriza por la implantación sistematizada de compañías teatrales profesionales fijas en las provincias.

De esta forma se cuenta con 19 centros dramáticos nacionales que durante la temporada de 1972-73 dieron unas 3.000 representaciones teatrales ante 1.100.000 espectadores y 700 espectáculos diversos ante unos 300.000 (aproximadamente tantos como en 1969-70).

Por Decreto de 2 de octubre de 1972 se ha creado el procedimiento de contrato de descentralización teatral que permite definir los derechos y obligaciones recíprocas del Estado y de cada uno de los centros dramáticos. Este contrato asegura a los directores el pago de una subvención básica durante tres años por la que se comprometen a presentar durante ese período un número determinado de espectáculos dramáticos nuevos, a los que se fija un número mínimo de representaciones, y a realizar actividades de creación, de difusión y de divulgación teatral en una región determinada.

Estas subvenciones permiten rebajar el precio de entrada a un nivel inferior en un 20% al del precio medio de una entrada de cine y dan una salida considerable a las nuevas obras.

Una de las medidas más notables de la descentralización ha sido la transferencia a la provincia, en 1972, en condiciones que le permiten convertirse en un teatro auténticamente nacional y popular, del Teatro Popular del Palacio de Chaillot; ubicado desde entonces en Villeurbanne, sus actividades se extienden a todo el territorio nacional con miras a que todas las categorías sociales de la población tengan acceso a los valores culturales.

Por último, se ha proseguido y diversificado la política de implantación de casas de cultura emprendida por el Sr. Malraux, no sólo en las ciudades importantes, sino también, y sobre todo, en ciudades de medianas dimensiones, nuevas ciudades y

pequeños centros dotados de realizaciones adaptadas a sus necesidades y a sus medios. En 1971 se inauguraron las casas de cultura de Châlon-sur-Saône y de Nevers y se emprendió el estudio de tres proyectos, es decir, los de Angers, Créteil y Nanterre. Los trabajos de Créteil comenzaron en enero de 1973. Se ha dado un gran impulso a los estudios de los proyectos del Havre, Aubervilliers y Bobigny. Se está estudiando la creación de una casa de cultura en La Rochelle y en Ajaccio (con filiales en Bastia, Corte, Propriano y Sartène) y, a un nivel más modesto, en Papeete (casa de cultura hermanada con un hogar de jóvenes construido en 1973) y en Martinica, donde se emprendió en 1972 una misión preparatoria.

En las ciudades de importancia mediana se han creado centros de actividades culturales, instalaciones más sencillas que la casa de cultura y adaptados a las necesidades de una ciudad de 30.000 a 60.000 habitantes. En 1972 y 1973 se añadieron diez de estos centros de actividades culturales (Mâcon, Orléans, Blois, Saint-Brieuc, etc.) a los 18 que ya existían.

Paralelamente a estas creaciones se están iniciando dos nuevos tipos de intervención: las instalaciones integradas y las instalaciones culturales más sencillas. Las primeras responden al deseo de no seguir, en las nuevas ciudades de Cergy-Pontoise, Evry y Elancourt-Maurepas, separando las funciones educativa, social, deportiva y cultural. Las segundas corresponden a las necesidades de las ciudades de importancia mediana que desean dotarse de una instalación polivalente a su medida.

Una nueva estructura, creada a finales de 1972, la Oficina de Intervenciones Culturales, está encargada de una misión general de asistencia a las comunidades, incluso a las asociaciones.

#### b) El plan decenal de la música

En 1969, la Dirección de la Música inició un plan de descentralización tendiente a multiplicar considerablemente las actividades musicales. Los primeros resultados han sido satisfactorios.

La ejecución de este plan incumbe a funcionarios regionales, los delegados musicales regionales, cinco de los cuales ya habían asumido sus funciones en 1973 (su número se elevará a 25); se prevé que las orquestas profesionales pasen de 17 a 71 (36 en 1974).

Los establecimientos para la enseñanza de la música controlados por el Estado han pasado de 45 (incluido el Conservatorio Nacional Superior de París) en 1968 a 74 en 1973.

La Dirección está ayudando a más de 1.000 grupos corales, 11 teatros líricos municipalizados, dos óperas regionales y 8 teatros líricos independientes. En 1973 prestó ayuda a 82 festivales, 18 grupos coreográficos y múltiples asociaciones.

En 1971, la música obtuvo por primera vez créditos para fines de equipo (10,7 millones) que ascendieron a 17,7 millones en 1972 y 26 en 1973, y se dedicaron a creaciones importantes (Conservatorio regional de Grenoble, Escuela Nacional de Música de Montreuil) y a la habilitación de salas de conciertos en 25 ciudades de provincia.

Un fondo de movilidad facilita desde 1973 la proyección cultural de las orquestas y de las compañías de teatro y amplía su auditorio mediante la subvención de los desplazamientos y la financiación de las emisiones de radio y televisión.

La meta deseada es instaurar una verdadera vida musical activa, no sólo en la escuela primaria, sino también en todos los cursos de la enseñanza "sin distinción de categoría social o de afiliación profesional".

Es indudable que se trata, para la cultura de los franceses, de una de las transformaciones profundas más importantes. Los resultados asombrosos obtenidos hasta la fecha permiten pensar que se alcanzará la meta, por muy ambiciosa que sea.

V. DIFICULTADES CON QUE SE HA TROPEZADO AL ASEGURAR EL DISFRUTE  
DE LOS DERECHOS MENCIONADOS EN LA SECCION III SUPRA, Y MEDIDAS  
Y METODOS ADOPTADOS PARA VENCERLAS

- a) Naturalmente, todos los progresos encaminados hacia el perfeccionamiento en el ejercicio del derecho del hombre a la cultura han tropezado con las dificultades propias de las costumbres rutinarias, los intereses antagónicos o, más simplemente, con la naturaleza propia de las cosas.

Estas dificultades se han enumerado a medida que se exponían, en cada una de las secciones anteriores, las nuevas realizaciones (por ejemplo la que trata de la extensión de la seguridad social a trabajadores esporádicos e independientes tales como los artistas).

Para no incurrir en repeticiones, cabe remitirse a esas secciones.

- b) De todas formas, se ha considerado que sería útil encuadrar en esta sección uno de los problemas que tiene más gravedad actualmente y que obedece a las diferencias profundas que coexisten y se enfrentan en los conceptos de las relaciones de la moral y de la libertad.

El mantenimiento de una censura oficial de los espectáculos (en especial de las películas) suscita periódicamente graves conflictos de opinión.

Francia ha visto, durante el período considerado, una liberalización progresiva del control de las películas que en la prensa, y hasta en la tribuna de la Asamblea Nacional, ha sido tachada de responsable de la invasión de pornografía y violencia en la producción cinematográfica.

La doctrina de los sucesivos Ministros de Cultura, a todos los cuales se ha interrogado en este sentido, ha sido de una constancia notable y se puede definir así: el papel de la colectividad no consiste en sustituir a la conciencia y al libre albedrío de la persona adulta, sino en ponerle en guardia. En cambio, con respecto a los adolescentes, cuya experiencia y juicio aún no están formados, la colectividad conserva un deber de protección. La prohibición de determinados espectáculos a los menores cumple esta función de protección y, al mismo tiempo, la función de información para los adultos.

Los detractores de esa actitud han podido decir que daba a todos (incluidos los adultos) una medida de confianza que la realidad no justificaba y que encerraba verdaderos peligros sociales. Sin embargo, es la única que ha parecido conciliable con los principios filosóficos que han inspirado la Declaración Universal de Derechos Humanos.